



«Las municipalidades no constituyen autoridades competentes para otorgar autorizaciones, ni fiscalizar actividades vinculadas al procesamiento de minerales»

EN ESTE NÚMERO | IN THIS ISSUE

Fiscalización municipal y plantas de beneficio: límites competenciales en minería

Municipal Oversight and Smelting Plants: Jurisdictional Limits in Mining

¿Censura o vacancia presidencial? Los puntos sobre las íes

Censure or presidential impeachment? Setting the record straight

Sujetos sin capacidad operativa: régimen, efectos tributarios y acciones para el adquirente

Taxpayers without operating capacity: Regulations, tax implications, and actions for the purchaser

IA con conciencia: usar la tecnología sin perder el control

AI with awareness: using technology without losing control



Fiscalización municipal y plantas de beneficio: límites competenciales en minería

LUCILA BARJA OTERO
Asociada senior, experta en minería y desarrollo sostenible

5



¿El ocaso de la protección de *software* por DRM (Digital Rights Management)? La iniciativa europea Stop Killing Games

SEBASTIÁN SUCÑER GOÑI
Practicante preprofesional de propiedad intelectual

8



¿Censura o vacancia presidencial? Los puntos sobre las íes

STEFANO RODRÍGUEZ BEGAZO
Asociado junior, experto en litigios y controversias

11



COMENTARIO TRIBUTARIO

Sujetos sin capacidad operativa: régimen, efectos tributarios y acciones para el adquirente

KARIN ORBEZO GRAHAMMER
Socia senior, experta en derecho tributario

14



COMENTARIO LABORAL

IA con conciencia: usar la tecnología sin perder el control

BORIS SEBASTIANI ARAUJO
Socio senior, experto en derecho laboral y seguridad social

16



La prueba de oficio tras el X Pleno Casatorio Civil

JULISSA YAMANI FERNÁNDEZ
Socia, experta en litigios

18



¿Es posible que la responsabilidad penal alcance a gerentes y directores de la empresa?

IAN GALARZA MORALES
Socio senior, experto en compliance/derecho penal

21



DESDE EL CONGRESO

- * Proyecto que garantiza la acreditación inmediata de las transferencias interbancarias.
- * Proyecto que crea el programa «Mi primera chamba» y establece un subsidio para promover la contratación formal.

24



EL EXPERTO

Vamos a la playa, oh, o-o-o-oh

ARTURO FERRARI CARRASCO
Gerente de Comunicaciones del Estudio Muñiz

26



ALERTA MÁXIMA

Corte Suprema declaró ilegal y nula norma que impedía tercerización de actividades principales o nucleares

28



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- * Desayuno ejecutivo
- * Reconocimiento
- * Practica UPCino

32



COLUMNAS
— REVISTA LEGAL —
NÚMERO 224

ESTUDIO MUÑIZ
MUÑOZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO ONO & HERRERA Abogados

Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Emely Mattos

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

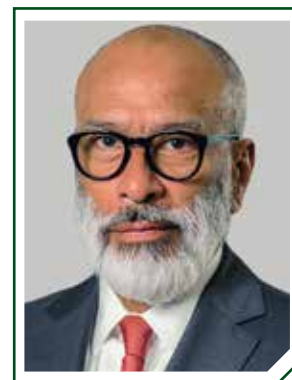
El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas.
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N° 2007-07703

OPENSAC
IDEAS & SOLUCIONES

editor.open@gmail.com
T- (51) 993416556

«Lo que Orwell temía era a aquellos que prohibirían los libros. Lo que Huxley temía era que no habría razón para prohibir un libro, porque no habría nadie que quisiera leer uno. Orwell temía a quienes nos privarían de información. Huxley temía a aquellos que nos darían tanta información que seríamos reducidos a la pasividad y el egoísmo. Orwell temía que la verdad nos sería ocultada. Huxley temía que la verdad se ahogaría en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convertiríamos en una cultura cautiva. Huxley temía que nos convertiríamos en una cultura trivial. En resumen, Orwell temía que lo que odiamos nos destruiría. Huxley temía que lo que amamos nos arruinaría» **Neil Postman**



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ

Socio principal - editor

DE CANDIDATA A GANADORA: AHORA TOCA GOBERNAR EN SERIO

A casi un mes de llevarse a cabo el balotaje final y al 99.877 % de las actas escrutadas (92 766, al cierre de esta edición), Keiko Fujimori (KF) ha conseguido (luego de 3 intentos fallidos) hacerse con la Presidencia de la República. El resultado es, pese a que su contendiente no solo no lo reconoce, sino que además lo rechaza, irreversible.

En primera vuelta, con 36 candidatos inscritos (cifra, además de inédita, penosa por lo que representa o dice, pues la mayoría de candidatos, siquiera capaces de gobernarse a sí mismos, pretendían hacerlo con un país y sus cerca de 35 millones de habitantes), KF obtuvo el respaldo de solo 2 877 678 de votantes de un total de 27 325 432 millones de electores hábiles, vale decir solo el 10.53 % del padrón electoral; votos, esos sí, por «convicción» o «identificación» con las ideas postuladas en su plan de gobierno. Esa cifra, no obstante, exigua, bastó para asegurarle un lugar en el balotaje final.

En la segunda vuelta, la historia fue un poco lo mismo que la elección anterior: i) fuerzas o movimientos políticos, ii) candidatos similares y iii) «fenómeno», vale decir, antifujimorismo vs. anticomunismo, o lo que es lo mismo, establishment vs. miseria. Y los resultados han tenido en ascuas a medio país y al otro también, aunque por razones distintas en cada caso.

De forma tal que KF habría obtenido (al cierre de esta edición) el 50.120 %, que representa 9 208 624 de votos; Roberto Sánchez (RS) el 49.879 %, 9 164 171 de votos; y un gran porcentaje, 24.28 %, 6 636 280, simplemente no atendió la votación. ¿Desidia, hartazgo, frustración, desesperanza? Elija Ud. el término que más le acomode.

No puede sostenerse entonces que es una victoria contundente o aplastante, con el añadido de que la diferencia entre sus casi 3 millones de votantes de la primera vuelta, frente a los 9 millones de la segunda (más, menos, 6 millones) no lo hizo precisamente por su plan de gobierno o lo que KF representaba, sino por el miedo o terror que les infundió la candidatura de RS.

Superado, entonces, el gran obstáculo de lo que particularmente para ella supuso ser elegida presidente o, lo que es lo mismo, ganar finalmente una elección, el gran problema de KF será ahora GOBERNAR. Y aun cuando de una forma u otra lo ha venido haciendo los últimos 2 lustros, pese a que sus acólitos digan que no, hacerlo en primera persona como presidente electo será otra cosa.

Por eso sorprende tanto que el pasado 22 de junio declarase que: «culminado el conteo de la ONPE, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde». Si bien es una decisión que nadie discute, porque calma a los agentes económicos, al establishment y sus votantes; políticamente es un mensaje incorrecto, por ser justamente para la mitad del país que no votó por ella, la confirmación absoluta de que las cosas seguirán igual o peor en todo aquello que no sea justamente lo económico.

Quizás lo primero que ha debido hacer es enviar un mensaje distinto, de concertación y diálogo, que apacigüe algo a ese amplio sector que aún está en «pie de guerra» con ella y con lo que representa, pues para algo tendría que haberle servido el suplicio personal sufrido en los tres últimos lustros, así como sus tres intentos fallidos previos; es decir, la experiencia como líder político de la que tanto se jacta.

En el plano internacional EE. UU. e Irán alcanzaron un armisticio con la firma, el pasado 17 de junio, de un memorándum de entendimiento para poner fin a la «guerra» iniciada por el primero contra el segundo en febrero pasado. En efecto, el acuerdo contempla 14 puntos, entre estos el levantamiento de todas las sanciones impuestas por EE. UU. contra Irán, la creación de un fondo económico de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de los daños causados por la guerra en este país y el compromiso de Irán de reabrir totalmente al tráfico marítimo el estrecho de Ormuz. Fuera del acuerdo quedaron las negociaciones sobre el programa de misiles balísticos iraní y la continuidad del régimen autocrático que gobierna con puño de hierro el país.

Y sobre el punto clave del acuerdo, que Irán no tendrá armas nucleares (la principal excusa para la guerra), ambos países se comprometen a trabajar en la eliminación del material nuclear enriquecido en poder de Irán actualmente. El problema con esto último es que el tiempo en que tal compromiso debe lograrse es muy corto (60 días), comparados con los 2 años que le tomó al gobierno de Obama alcanzar algo parecido durante su mandato en el 2015.

El acuerdo en realidad retorna las cosas a febrero pasado, así que la guerra y sus nefastas consecuencias (miles de muertos, destrucción y crisis económica mundial por la subida del precio del petróleo) bien pudo haberse evitado. Según Jeremy Bowen, editor internacional de noticias de la BBC: «esta guerra ha sido el peor error de política exterior de Trump». No obstante, este último, muy fiel a su estilo, parece no haberse enterado. »

«What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one. Orwell feared those who would deprive us of information. Huxley feared those who would give us so much that we would be reduced to passivity and egoism. Orwell feared that the truth would be concealed from us. Huxley feared the truth would be drowned in a sea of irrelevance. Orwell feared that we would become a captive culture. Huxley feared we would become a trivial culture. In short, Orwell feared that what we hate will ruin us. Huxley feared that what we love would ruin us» **Neil Postman**

FROM CANDIDATE TO WINNER: NOW IT IS TIME TO GOVERN IN EARNEST

Almost a month after the final runoff and with 99.877% of the ballots counted (92,766 at the close of this edition), Keiko Fujimori (KF) has secured the Presidency of the Republic after three failed attempts. The result is irreversible, despite her opponent's refusal to acknowledge it and his outright rejection.

In the first round, with 36 registered candidates (a figure that is not only unprecedented but also disheartening given what it represents or implies—most of those candidates barely able to govern themselves, aspired to govern a country of nearly 35 million inhabitants), KF obtained the support of only 2,877,678 voters out of a total of 27,325,432 eligible voters—that is, just 10.53% of the electorate. Those votes were, indeed, cast out of “conviction” or “identification” with the policies set forth in her government plan. That meager total was nonetheless enough to secure her a spot in the final runoff.

In the runoff election, the story was much the same as it had been in previous election: i) political forces or movements, ii) similar candidates, and iii) a “phenomenon”—that is, anti-Fujimorism versus anti-communism—or, in other words, the establishment versus poverty. The results have left half the country on edge and the other half as well, albeit for different reasons.

As of the close of this edition, KF has obtained 50.120%, representing 9,208,624 votes; Roberto Sánchez (RS) 49.879%, or 9,164,171 votes; and a substantial share—24.28%, or 6,636,280—simply did not vote. Apathy, weariness, frustration, hopelessness? Choose the term that suits you best.

This cannot be described, then, as a resounding or landslide victory, particularly given that the increase from roughly 3 million first-round supporters to some 9 million in the second round (give or take 6 million) was not driven chiefly by her government plan or what KF stood for, but rather by the fear or dread RS's candidacy arouse.

Having thus overcome the major hurdle—what for her personally meant finally being elected president—the principal challenge for KF will now be to GOVERN. Although she has, in one form or another, exercised influence over the past decade despite her followers' claims to the contrary, governing firsthand as president-elect will be an entirely different matter.

It is therefore all the more surprising that on June 22 she declared:

“Once the ONPE count is complete, the first thing I will do is request a meeting with Julio Velarde.” While this decision is indisputable—since it reassures economic actors, the establishment, and her voters—politically, it sends the wrong message: for the half of the country that did not vote for her, it constitutes an absolute confirmation that things will remain the same or worsen in every domain other than the strictly economic.

Perhaps the first thing she should have done was to send a different message—one of reconciliation and dialogue—to appease that broad sector still “up in arms” against her and what she represents. After all, her personal ordeal over the past fifteen years and her three prior failed attempts should have furnished her with the political experience to do so, the very experience she often boasts of.

On the international stage, the United States and Iran reached a ceasefire with the signing, on June 17, of a memorandum of understanding to end the “war” initiated by the former against the latter last February. This agreement comprises fourteen points, among them the lifting of all U.S. sanctions imposed on Iran, the creation of a USD 300 billion fund for reconstruction of war-damaged areas in Iran, and Iran's commitment to fully reopen the Strait of Hormuz to maritime traffic. Negotiations regarding Iran's ballistic missile program and the continued existence of the autocratic regime that rules the country with an iron fist were left out of the accord.

And regarding the agreement's key point—that Iran will not possess nuclear weapons (the main pretext for the war)—both countries have committed to work toward eliminating the enriched nuclear material currently held by Iran. The problem is that the timeframe for reaching such an agreement is very short (60 days), compared with the two years it took the Obama administration to reach a similar agreement in 2015.

The agreement effectively restores the status quo of last February, meaning the war and its disastrous consequences (thousands dead, widespread destruction, and a global economic crisis due to rising oil prices) could very well have been avoided. According to Jeremy Bowen, the BBC's international news editor: “The war has been President Donald Trump's worst foreign policy blunder.” Nonetheless, Trump, true to his style, appears oblivious to the situation. »



FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y PLANTAS DE BENEFICIO: LÍMITES COMPETENCIALES EN MINERÍA

En los últimos años se ha vuelto recurrente que diversas municipalidades pretendan fiscalizar, sancionar o incluso paralizar operaciones vinculadas a plantas de beneficio de minerales, alegando supuestas infracciones relacionadas con autorizaciones municipales, licencias de funcionamiento o ejecución de infraestructura dentro de sus jurisdicciones. Sin embargo, dichas actuaciones evidencian una problemática cada vez más frecuente: la indebida expansión de competencias municipales sobre actividades cuya regulación y fiscalización corresponde a autoridades sectoriales mineras.

Como punto de partida, debe considerarse que las plantas de beneficio constituyen instalaciones técnicas especializadas destinadas al procesamiento y recuperación metalúrgica de minerales. En efecto, conforme a los artículos 17 y 18 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-92-EM (en adelante, "TUO de la Ley General de Minería"), el beneficio comprende procesos físicos, químicos o físico-químicos destinados a extraer, concentrar, fundir o refinar minerales, mientras que la concesión de beneficio otorga a su titular el derecho a desarrollar dichas actividades.

En concordancia con ello, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2016-EM (en adelante, el "RSSOM"), define a las plantas de beneficio como instalaciones destinadas a desarrollar procesos de concentración, clasificación, lixiviación, fundición y refinación de minerales. Así, se trata de actividades sometidas a un régimen técnico y sectorial especializado.



LUCILA BARJA OTERO

Asociada senior, experta en minería y desarrollo sostenible
Senior Associate, Expert in Mining and Sustainable Development
 lbarja@munizlaw.com

En los últimos años se ha vuelto recurrente que diversas municipalidades pretendan fiscalizar, sancionar o incluso paralizar operaciones vinculadas a plantas de beneficio de minerales, alegando supuestas infracciones relacionadas con autorizaciones municipales, licencias de funcionamiento o ejecución de infraestructura dentro de sus jurisdicciones.

Precisamente, el ordenamiento jurídico peruano ha diseñado un esquema competencial específico respecto de estas actividades. El artículo 93 del TUO de la Ley General de Minería establece que la jurisdicción administrativa minera corresponde al Poder Ejecutivo y es ejercida por las autoridades mineras competentes. Asimismo, los artículos 101 y 129 de dicho cuerpo normativo atribuyen a la Dirección General de Minería la competencia para otorgar concesiones de beneficio.

En esa misma línea, el Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2020-EM, regula el procedimiento para el otorgamiento del título de concesión de beneficio y las autorizaciones de construcción y funcionamiento de plantas de beneficio, competencias que corresponden al Minem; y, en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, a los Gobiernos Regionales.

Del mismo modo, el Reglamento para la Protección y Gestión Ambiental de las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM, reconoce que la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental de las actividades mineras corresponde al OEFA y a los Gobiernos Regionales, según el estrato minero involucrado. Asimismo, el propio RSSOM atribuye competencias de supervisión y fiscalización en materia de seguridad minera a Osinergmin y a los Gobiernos Regionales.

Pese a este marco normativo, algunas municipalidades continúan intentando exigir autorizaciones adicionales para la instalación u operación de plantas de beneficio, sustentando dichas actuaciones en disposiciones generales de la Ley Orgánica de Municipalidades. No obstante, si bien los gobiernos locales poseen competencias en materias como zonificación, uso de suelo, acondicionamiento territorial o control urbano, ello no los faculta a sustituir ni duplicar competencias sectoriales en materia minera, ambiental o de seguridad operacional.

Sobre este punto, resulta particularmente relevante considerar el criterio adoptado por Indecopi mediante la Resolución N° 0264-2007/CAM-INDECOPI, a través de la cual se declaró ilegal la exigencia municipal de contar con autorizaciones para la instalación y funcionamiento de plantas minero-metalúrgicas. Asimismo, el Consejo de Minería, máxima instancia administrativa en materia minera, ha señalado expresamente, mediante Resolución N° 274-2019-MEM-CM, que las municipalidades no constituyen autoridades competentes para otorgar autorizaciones, ni fiscalizar actividades vinculadas al procesamiento de minerales, aun cuando estas se desarrollen en zonas urbanas.

La relevancia de este debate no es menor. La indebida superposición de competencias no solo genera incertidumbre regulatoria y afecta la predictibilidad de las inversiones, sino que además puede comprometer la continuidad de las operaciones mineras mediante restricciones, paralizaciones o clausuras emitidas por autoridades sin competencia legal para fiscalizar actividades de beneficio.

En ese sentido, resulta indispensable que las empresas mineras identifiquen oportunamente este tipo de riesgos regulatorios y evalúen adecuadamente el alcance de las competencias municipales frente a actividades sometidas a regulación sectorial minera especializada.)))

Municipal Oversight and Smelting Plants: Jurisdictional Limits in Mining

In recent years, it has become common for several municipalities to attempt to regulate, penalize, or even halt operations related to smelting plants for alleged violations concerning municipal permits, operating licenses, or infrastructure projects within their jurisdictions. However, these actions highlight an increasingly common problem: the improper expansion of municipal authority over activities that should be regulated and overseen by sector-specific mining authorities.

As a starting point, it should be noted that smelting plants are specialized technical facilities intended for the processing and metallurgical recovery of minerals. In fact, pursuant to Articles 17 and 18 of the Consolidated Text of the General Mining Law, approved by Supreme Decree No. 014-92-EM (hereinafter, "Consolidated Text of the General Mining Law"), smelting includes physical, chemical, or physicochemical processes intended to extract, concentrate, melt, or refine minerals, while the smelting concession grants its holder the right to carry out such activities.

Accordingly, the Regulations on Occupational Health and Safety in Mining, approved by Supreme Decree No. 024-2016-EM (hereinafter the "RSSOM"), define processing plants as facilities designed to carry out the concentration, classification, leaching, melting, and refining of minerals. Thus, these activities are subject to a specialized technical and sector-specific regulatory framework.

In fact, the Peruvian legal system has established a specific framework governing jurisdiction over these activities. Article 93 of the Consolidated Text of the General Mining Law provides that administrative jurisdiction over mining matters lies with the Executive Branch and is exercised by the competent mining authorities. Furthermore, Articles 101 and 129 of the same body of law vest the General Directorate of Mining with the authority to grant mining concessions.

Likewise, the Mining Procedures Regulations, approved by Supreme Decree No. 020-2020-EM, governs the procedure for granting mining concession titles and authorizations for the construction and operation of smelting plants, powers vested in the Ministry of Energy and Mines (MINEM) and, in the case of small-scale and artisanal mining, in the regional governments.

Similarly, the Regulation on Environmental Protection and Management of Mining Exploration, Smelting, General Labour, Transport, and Storage Activities, approved by Supreme Decree No. 040-2014-EM, provides that the environmental assessment, oversight, and enforcement of mining activities correspond to the Environmental Assessment and Enforcement Agency (OEFA) and the regional governments, as applicable. Likewise, the RSSOM assigns oversight and enforcement powers in mining safety matters to OSINERGMIN and the regional governments.

Despite this regulatory framework, certain municipalities continue to attempt to require additional authorizations for the installation and operation of smelting plants, relying on general provisions of the Organic Law of Municipalities. However, although local governments have competencies in areas such as zoning, land use, territorial planning, and urban control, this do not authorize them to replace or duplicate sectoral competencies in mining, environmental, or occupational safety matters.

In this regard, it is particularly important to consider the approach adopted by Indecopi in Resolution No. 0264-2007/CAM-INDECOPI, which declared illegal the municipal requirement to obtain permits for the installation and operation of mining and metallurgical plants. Likewise, the National Mining Council, the highest administrative authority in mining matters, has expressly stated in Resolution No. 274-2019-MEM-CM that municipalities are not competent authorities to grant authorizations or oversee ore processing related activities, even if such activities are carried out in urban areas.

The importance of this debate cannot be overstated. The improper overlap of competencies not only creates regulatory uncertainty and undermines the predictability of investments, but may also jeopardize the continuity of mining operations through restrictions, suspensions, or closure orders issued by authorities lacking legal competence to oversee beneficiation activities.

In this regard, it is essential that mining companies promptly identify these type of regulatory risks and properly assess the scope of municipal authority with respect to activities subject to specialized mining regulation. »



¿EL OCASO DE LA PROTECCIÓN DE SOFTWARE POR DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)? LA INICIATIVA EUROPEA STOP KILLING GAMES

La polémica frase publicada por el Foro Económico Mundial “No tendrás nada y serás feliz” ha suscitado diversas críticas y preocupaciones; sin embargo, solo la comunidad gamer ha logrado llevar este malestar hasta el Parlamento Europeo.

La iniciativa Stop Killing Games (en adelante, SKG) tiene como objetivo reformar el modelo de negocio de los videojuegos en línea, argumentando que las condiciones actuales son abusivas para los consumidores y perjudican la preservación de los medios digitales. Con 1.3 millones de firmas válidas, SKG ha logrado dar su primer gran paso al presentarse ante tres comisiones de la Unión Europea el pasado 16 de abril. El objetivo, por supuesto, es cambiar las legislaciones pertinentes ante la problemática.

Más allá de los cuestionamientos en materia de derecho del consumo, un factor central en el reclamo ciudadano ha sido el mecanismo de protección de *software* always-online DRM (en adelante, DRM).

El *software* en “el corredor de la muerte”

La era de los cartuchos y discos ha quedado atrás debido a la ventaja del formato digital. A través de este, el usuario no recibe la “propiedad” sobre su copia del *software*, sino una licencia de uso revocable.

Asimismo, el DRM es un mecanismo que exige que el usuario del *software* mantenga

una conexión permanente a un servidor centralizado para que el producto sea funcional, condicionando la ejecución del código a una infraestructura externa controlada por el titular a fin de evitar actos de piratería. Dicho en palabras simples, al adquirir un videojuego, el *software* descargado ni siquiera es la integridad del mismo, ya que para ejecutarse requiere de la voluntad del propietario.

En 2024, el videojuego The Crew fue dado de baja por decisión de Ubisoft, generando que sus usuarios perdieran el acceso a él para siempre. Esto desencadenó el inicio de SKG, así como de múltiples acciones judiciales en Europa y Estados Unidos. Del mismo modo, miles de juegos han desaparecido de la faz del internet sin posibilidad de ser recuperados.

¿Está el derecho de autor matando a los videojuegos?

El profesor Marcin Barczyk advirtió ante el Parlamento Europeo que “la sociedad se enfrenta al riesgo de perder permanentemente patrimonio cultural en forma de videojuegos”. En tanto el Derecho responde a los fines que una sociedad valora, la crítica hacia el ejercicio de los derechos de exclusiva como un obstáculo al acceso a la cultura no es reciente. Diversas opiniones han sostenido que la información, por su naturaleza de bien público, no debería ser “secuestrada” por sus titulares. Y aunque se argumente que la propiedad intelectual incentiva la creación, autores como Bullard (2005) recuerdan que grandes obras clásicas surgieron sin necesidad de estas leyes¹.

Si bien lo anterior tiene mucho de cierto, considero que lo que SKG pone de manifiesto no es una supuesta ilegitimidad de la propiedad intelectual, sino la necesidad de un marco de estabilidad para un hipotético “derecho a la propiedad inmaterial”. Es decir, que la preservación digital de lo producido culturalmente tenga algún respaldo legal. Y lo anterior, aun así, generará que la industria, por lo menos, se replantee la manera en la que protege sus creaciones.

¿SKG matará el *software* barato?

Creo que la prudencia es lo que debería primar en cualquier intervención regulatoria. Los pedidos de SKG involucran muchas cosas, tales como la exigencia de planes de cierre para los videojuegos con DRM y, asimismo, no se contentarán con meras notificaciones anticipadas de la baja de una obra. En tal sentido, conviene recordar lo que es una verdad de Perogrullo: nada es gratis.

El modelo de negocio de las compañías de videojuegos incluye las prácticas que SKG pretende eliminar, pero también muchas bondades como los descuentos de verano, el sistema de *bundles*, el préstamo y las cuentas familiares. Tal vez lo más intrigante está vinculado al elefante en la habitación: ¿cómo reaccionará el ecosistema dominante, Steam, ante todo esto? Para variar, es saludable que esta iniciativa no nazca, como en nuestras latitudes, de decisiones unilaterales del aparato estatal. Pero, ¿estarán los gamers preparados para el siguiente nivel? Quedaremos atentos a los resultados de este proceso, que todavía da para largo.)))



SEBASTIÁN SUCNER GOÑI

Practicante preprofesional de propiedad intelectual
Intern - Intellectual property department
ssucner@munizlaw.com

¹ “Reivindicando a los piratas: ¿es la propiedad intelectual un robo?”. En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Lima. 2005.

Is it the decline of DRM (Digital Rights Management) software protection? The European “Stop Killing Games” initiative

The controversial statement published by the World Economic Forum, “You will own anything, and be happy”, has sparked widespread criticism and concern. However, only the gaming community has managed to bring this issue to the European Parliament.

The European Stop Killing Games initiative (hereinafter referred to as SKG) aims to reshape the online video game business model, claiming that current conditions are unfair to consumers and detrimental to the preservation of digital media. Having secured 1.3 million valid signatures, SKG has taken its first major step by appearing before three European Union committees on April 16th. The goal, of course, is to amend the relevant legislation in response to this issue.

Beyond consumer rights concerns, a pivotal factor in the public outcry has been the always-online DRM software protection mechanism (hereinafter referred to as DRM).

Software on “death row”

The era of cartridges and discs is long gone, driven by the benefits of the digital format. Under this agreement, the user does not acquire “ownership” of their copy of the software, but rather a revocable end-user license.

Furthermore, DRM is a mechanism that requires the software user to maintain a constant connection to a centralized server for the product to work, making the execution of the code dependent on an external infrastructure controlled by the rights holder in order to prevent piracy. In other words, when you purchase a video game, the downloaded software isn’t even the complete game, since it requires the publisher’s permission to run.

In 2024, the video game *The Crew* was shut down by Ubisoft, causing users to permanently lose access to it. This led to the launch of SKG, as well as multiple legal actions in Europe and the United States. Likewise, thousands of games have vanished from the internet, with no possibility of retrieval.

Is copyright killing video games?

Professor Marcin Barczyk warned the European Parliament that “society faces the risk of permanently losing cultural heritage in the form of video games.” Insofar as the law serves the purposes valued by society, criticizing exclusive rights as an obstacle to cultural access is nothing new. Various opinions have argued that information, given its status as a public good, should not be “held hostage” by its rights holders. And while it may be argued that intellectual property encourage creativity, authors such as Bullard (2005) remind us that classical works were created without the need for such laws¹.

Although much of the above is true, I believe that what SKG highlights is not the alleged illegitimacy of intellectual property, but rather the need for a stable framework for a hypothetical “right to intangible property.” In other words, the digital preservation of cultural works should have some form of legal basis. Even so, this will, at the very least, prompt the industry to rethink the way it protects its creations.

Will SKG kill off cheap software?

I believe that prudence should be the guiding principle in any regulatory action. SKG’s demands involve many aspects, such as requiring closing strategies for video games with DRM. Also, they will not settle for mere advance notices of a title’s discontinuation. In that regard, it’s worth remembering a truism: nothing comes for free.

The business model of video game companies includes the practices that SKG aims to eliminate, but it also offers many benefits, such as summer sales, bundle systems, game sharing, and family accounts. Perhaps the most intriguing question is the elephant in the room: how will the dominant platform, Steam, react to all of this? Notably, it is reassuring that this initiative does not arise, as it does in our part of the world, from unilateral decisions by the state apparatus. Yet, are gamers ready for what comes next? We will be keeping a close eye on the outcome of this process, which is still a long way off. ¶

¹ “Vindicating Pirates: Is Intellectual Property Theft?” In: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales* (Andean Yearbook of Intellectual Property Rights). Lima. 2005.



¿CENSURA O VACANCIA PRESIDENCIAL? LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES



STEFANO RODRÍGUEZ BEGAZO

Asociado junior, experto en litigios y controversias
Junior Associate, *Litigation & Dispute Resolution*
srodriguez@munizlaw.com

Ahora que corren los lentos derramando trova me permito transmitir algunas ideas relacionadas al reciente uso de la censura para defenestrar al presidente de la República, inobservando que el trámite para tal fin resulta ser la vacancia presidencial; y demostrando nuevamente que en nuestro país “Kafka hubiese sido un autor costumbrista”.

Como es sabido, la presidencia de la República puede ejercerse por elección popular o por sucesión presidencial. El artículo 115 de la Constitución prevé que, por impedimento del presidente de la República asume el cargo el primer vicepresidente. En su defecto, el segundo vicepresidente. Y, en defecto de ambos, el presidente del Congreso; vale decir, el presidente de la mesa directiva de tal poder del Estado.

El artículo 113 de la Constitución señala —sin hacer distinción entre quien la ejerce— que la presidencia vaca por cinco supuestos concretos y cerrados. El trámite legal de la vacancia es particular, en especial porque fue regulado como consecuencia de una sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional (00006-2003-AI/TC); a través de la cual se advirtió que la vacancia por incapacidad moral no tenía —en aquel momento— procedimiento especial aplicable, corriendo el riesgo de que “el más alto cargo de la Nación pueda quedar vacante

Hablar del «encargado» de la presidencia de la República es una cuestión retórica, pues constitucionalmente hablando tiene todas sus prerrogativas y protecciones constitucionales. Pretender defenestrarlo con una moción de censura desnaturaliza por completo nuestro sistema presidencial, debilitando aún más nuestra institucionalidad.

como consecuencia de mayorías simples”¹. Se exhortó al Congreso a regular un trámite especial para tramitar tal moción y, sobre todo, se exigió una votación no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso (87 votos).

Esto es así por el modelo presidencialista que inspira a nuestra Constitución. El presidente personifica a la Nación, es jefe de las Fuerzas Armadas, de Estado, de gobierno, etc. Es —al menos en la teoría— el protagonista político del país, y precisamente por ello vacarlo debe ser un procedimiento reflexivo; pues por lo contrario desnaturalizaríamos y vaciaríamos de contenido nuestro diseño presidencial.

La censura no cuenta con las mismas rigurosidades. No me refiero —como es obvio— a la censura ministerial, histórico mecanismo de control del poder legislativo al poder ejecutivo. Si no, por lo contrario, a la censura a la mesa directiva del Congreso en el contexto en el cual el presidente del legislativo sea —al mismo tiempo— presidente de la República por sucesión.

A través de esta figura los parlamentarios pueden remover del cargo a un miembro de la mesa directiva por determinadas inconductas producidas en el ejercicio del cargo, no en ejercicio de labores presidenciales; pues para ello existe, en el capítulo del Poder Ejecutivo, la vacancia presidencial.

La censura puede ser aprobada con una mayoría simple del número hábil de congresistas, asunto sumamente peligroso. Supongamos por un momento que el 20 % de parlamentarios se encuentra de licencia (número máximo permitido por el reglamento del Congreso). Tendríamos, en ese supuesto, 104 parlamentarios hábiles. Si ese es el caso, solo se necesitaría un quorum de 53 parlamentarios para sesionar². Si solo se necesita una mayoría simple para aprobar la censura podríamos concluir que un miembro de la mesa podría ser censurado con tan solo 27 votos, o lo que es peor, solo 19 votos en caso 16 parlamentarios se abstengan.

Hablar del “encargado” de la presidencia de la República es una cuestión retórica, pues constitucionalmente hablando tiene todas sus prerrogativas y protecciones constitucionales. Pretender defenestrarlo con una moción de censura desnaturaliza por completo nuestro sistema presidencial, debilitando aún más nuestra institucionalidad.

Vivir en un Estado constitucional de derecho supone —entre otras cosas— que la Constitución limita al poder. Cuando se amolda la Constitución al son de la coyuntura política lo que tenemos es solo un reflejo del poder, no un límite. La “censura presidencial”, término contradictorio que llega a ser casi una cacofonía, es un capítulo de nuestra vida constitucional que no debería volver a transitarse.)))

¹ Considerando 26 de la sentencia.

² Obsérvese el artículo 52 del reglamento del Congreso de la República.

Censure or presidential impeachment? Setting the record straight

Iwould like to share a few thoughts regarding the recent use of censure to remove the President of the Republic —ignoring the fact that the procedure for such an action is presidential impeachment— and demonstrating once again that in our country, “Kafka would have been a folk author.”

As it is well known, the presidency of the Republic can be taken through popular election or presidential succession. Article 115 of the Constitution provides that, in the event that the President of the Republic is unable to perform their duties, the first vice president will take office and, otherwise, the second vice president. And, in the absence of both, the President of Congress; that is to say, the president of the Board of Directors of that branch of government.

Article 113 of the Constitution states —without making a distinction between those who hold office— that the President can be impeached under five specific and final circumstances. The legal process for impeachment from office is unique, particularly because it was established in response to an advisory ruling by the Constitutional Court (00006-2003-AI/TC) in which it was noted that impeachment due to moral incapacity did not —at that time— have a special applicable procedure, posing the risk that “the highest position in the Nation could become vacant as a result of simple majorities.”¹ Congress was urged to establish a special procedure for processing such a motion, and, above all, a vote of no less than two-thirds of the majority vote in Congress (87 votes) was required.

This is due to the presidential system that serves as the basis for our Constitution. The president embodies the nation; he is the Commander-in-Chief of the Military, the Head of State, the Head of Government, etc. He is —at least in theory— the country’s political leader, and precisely for that reason, impeachment must be carefully considered; otherwise, the very essence of our presidential system would be distorted and undermined.

Censure is not held to the same standards. Obviously, I am not talking about ministerial censure, the traditional mechanism by which the legislative branch exercises control over the executive branch. On the contrary, I am talking about censure to the Board of Directors of the Congress within the context in which the speaker of the legislative is, simultaneously, acting as President of the Republic by virtue of presidential succession.

Through this mechanism, members of the Congress may remove a member of the Board of Directors from office for specific acts of misconduct committed in the course of their duties, but not in the exercise of their presidential duties; for such cases, the chapter on the Executive Branch provides for presidential impeachment.

A motion of censure can be approved by a simple majority of the eligible members of the Congress, which is an extremely dangerous situation. Let us suppose for a moment that 20% of the members of the Congress are on leave (the maximum number allowed under the regulations of the Congress). In that case, there would be 104 eligible congressmen. If that is the case, a quorum of 53 congressmen would be enough to hold a session². If only a simple majority is required to approve a motion of censure, we could conclude that a member of the board of directors could be censured from office with as few as 27 votes, or even worse, with only 19 votes if 16 members abstain.

To speak about the “interim” president of the Republic is a rhetorical question, since, constitutionally speaking, he possesses all constitutional prerogatives and protection. Attempting to oust him through a motion of censure completely distorts our presidential system, further weakening our institutional framework.

Living in a constitutional state of law means, among other things, that the Constitution sets limits on power. When the Constitution is shaped by the political circumstances, what we have is merely a reflection of power, not a limitation. “Presidential censure”. A contradictory term that sounds almost like a cacophony, is a chapter in our constitutional history that should never be revisited.)))

¹ Whereas 26 of the ruling.

² See article 52 of the Regulations of the Congress of the Republic.

Sujetos sin capacidad operativa: régimen, efectos tributarios y acciones para el adquirente



KARIN ORBEZO GRAHAMMER
Socia senior, experta en derecho tributario
Senior Partner, expert in Tax Law
korbezo@munizlaw.com

Cada vez es más frecuente que las empresas enfrenten fiscalizaciones de Sunat, en las que el auditor fiscal cuestiona la deducción del gasto o costo tributario, así como el crédito fiscal de operaciones de compra de bienes y/o servicios bajo el argumento de que las operaciones que las generan no son reales. Para ello, la Administración basa su posición en diversas carencias o falencias de los proveedores que se encuentran habilitados por la Sunat para emitir comprobantes de pago, sin ninguna restricción, imputando así al comprador la responsabilidad de dichas irregularidades.

La solución legislativa que encontró la Sunat para combatir la evasión tributaria y el uso de operaciones no reales es la creación de la figura del “Sujeto Sin Capacidad Operativa (SSCO)”. Así, a través del Decreto Legislativo 1532, publicado el 19 de marzo de 2022 y vigente a partir del 1 de enero de 2023, se crea la figura del “Sujeto Sin Capacidad Operativa”, norma que permite a la Sunat calificar como SSCO a aquel contribuyente que, aun estando inscrito en el RUC y habilitado para emitir comprobantes de pago, no cuenta con recursos humanos, materiales, técnicos o financieros suficientes para desarrollar las actividades comerciales que se indican en la ficha RUC. Para ello, la Sunat inicia un procedimiento de atribución de SSCO, notificando al contribuyente con una carta y un requerimiento de información solicitando la presentación de documentación para desacreditar la calificación de SSCO. El contribuyente tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar los medios probatorios que acrediten que sí cuenta con capacidad operativa. Si los documentos presentados por el contribuyente no desvirtúan la atribución, la Sunat emite su pronunciamiento dentro de los 30 días hábiles siguientes, a través de una resolución de atribución de SSCO, la cual podrá ser impugnada por el contribuyente en la vía administrativa (reclamación y apelación).

Una vez que dicha resolución de atribución de SSCO haya quedado firme, la Sunat la publicará en su página web y en el Diario Oficial El Peruano el último día calendario del mes en que esta haya quedado firme.

Una vez publicada la condición de SSCO, el sujeto calificado queda imposibilitado de emitir facturas, quedando solo habilitado a emitir boletas de venta y notas de débito y crédito vinculadas a dichas operaciones durante cinco años, computados a partir del día calendario siguiente a la publicación.

El impacto más relevante de dicha publicación recae en los clientes que recibieron en el pasado facturas emitidas por el SSCO, ya que la Sunat puede desconocer el crédito fiscal y el gasto/costo de todas las facturas emitidas por dicho sujeto desde el 20.3.2022 hasta el día de la publicación, aun cuando los comprobantes sean formalmente válidos. Sin embargo, la norma contempla un mecanismo de defensa que permite al cliente solicitar a la Sunat, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación, la revisión de los comprobantes emitidos por un SSCO, iniciando la Sunat una fiscalización parcial, orientada a verificar la fehaciencia de las operaciones contenidas en las facturas objeto de revisión, debiendo el cliente presentar el soporte probatorio que acredite de manera suficiente la fehaciencia de las operaciones, por ejemplo, contratos, informes técnicos o reporte de servicios, etc.

Bajo este contexto, es necesario que las empresas refuercen sus procesos de cumplimiento tributario y gestión de proveedores. No es suficiente con verificar si el proveedor tiene la condición de habido y puede emitir facturas válidas, sino que es necesario evaluar si el proveedor tiene capacidad operativa para realizar actividades comerciales. Además, es imprescindible que las empresas revisen de manera frecuente la lista de SSCO que publica Sunat, a fin de solicitar a esta dentro de los próximos 30 días hábiles la revisión de las facturas emitidas por el proveedor con dicha condición, ya que, de no hacerlo, el gasto o costo tributario y el crédito fiscal de dichas facturas no serán aceptados por Sunat.

La Sunat ya ha incorporado a más de 100 empresas al padrón de SSCO y esta lista continuará creciendo. Por eso, hoy más que nunca, la prevención es clave. ¶¶

Taxpayers without operating capacity: Regulations, tax implications, and actions for the purchaser

It is becoming increasingly common for companies to face audits by the National Superintendence of Customs and Tax Administration (SUNAT, in Spanish), during which the tax auditor questions the deduction of tax expenses or costs, as well as the tax credit from purchase operations of goods and/or services subject to the argument that the transactions generating them are not genuine. For this, the Administration's position is based on several deficiencies or shortcomings of suppliers that have been authorized by SUNAT to issue proofs of payment without restrictions, thereby attributing the liability for such irregularities onto the buyer.

The legal solution adopted by SUNAT to fight tax evasion and the use of non-genuine transactions is the creation of the legal concept of "Taxpayer Without Operational Capacity (SSCO, in Spanish)". Thus, through Legislative Decree 1532 published on March 19, 2022, and active as of January 1st, 2023, the figure of the "Taxpayer Without Operational Capacity" was created. This regulation allows SUNAT to classify as an SSCO any taxpayer who, despite being registered in the Peruvian Taxpayer Registry (RUC, in Spanish) and authorized to issue proofs of payment, lacks sufficient human, material, technical or financial resources to carry out the business activities as declared in its Taxpayer record. To do this, SUNAT initiates an SSCO attribution procedure, notifying the taxpayer with a letter and an information request, demanding the submission of documentation to disprove the SSCO classification. The taxpayer has a period of 30 business days to submit evidence demonstrating that it does indeed have operational capacity. If the documents presented by the taxpayer do not prove otherwise, SUNAT issues its ruling within the following 30 business days through an SSCO attribution resolution which can be challenged by the taxpayer through administrative channels (claim and appeal).

Once the SSCO determination resolution becomes final, SUNAT will publish it on its website and in the *El Peruano* Official Journal on the last calendar day of the month in which the resolution became final.

Once the SSCO condition is published, the qualified taxpayer is barred from issuing invoices, remaining authorized only to issue sales receipts as well as debit and credit notes linked to such operations for five years, computed from the calendar day following the publication.

The most relevant impact of this publication falls on the customers who received the invoices issued by the SSCO in the past, since SUNAT may not acknowledge the tax credit and the tax expense/cost of all invoices issued by said taxpayer from March 20, 2022, until the date of publication, even if the documents are formally valid. However, the regulation provides a defense mechanism that allows the customer to request SUNAT, within 30 business days following the publication, to review the invoices issued by an SSCO. SUNAT will then initiate a partial audit aimed at verifying the authenticity of the transactions contained in the invoices under review. The customer must present supporting evidence that sufficiently proves the authenticity of the operations, such as agreements, technical reports, or service reports, etc.

In this context, it is necessary for companies to reinforce their taxpayer compliance proceedings and supplier management. It is not enough to check whether the supplier has a verified condition and can issue valid invoices; it is also necessary to evaluate whether the supplier has the operational capacity to carry out commercial activities. In addition, it is essential for companies to frequently review SSCO list published by SUNAT in order to request, within the following 30 business days, a review of the invoices issued by any supplier with that status. Failure to do so will result in the tax expense or cost and the tax credit of those invoices not acknowledged by SUNAT.

SUNAT has already included more than 100 companies to the SSCO registry, and this list will continue to grow. Therefore, now more than ever, prevention is key.)))

IA con conciencia: usar la tecnología sin perder el control



BORIS SEBASTIANI ARAUJO
Socio senior, experto en derecho laboral y seguridad social
Senior Partner, expert in Labor and Social Security Law
bsebastiani@munizlaw.com

La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro. Es una realidad que opera en hospitales, juzgados, empresas y universidades. Y en Perú, desde setiembre de 2025, también tiene reglamento: el Decreto Supremo N° 115-2025-PCM regula su uso en el marco de la Ley N° 31814 y deja claro algo que muchos prefieren ignorar: la IA puede hacer daño si no se usa bien.

El reglamento no llega para frenar la innovación. Llega para que nadie juegue con fuego sin extintor cerca. Establece que todo sistema de IA debe operar bajo principios concretos: transparencia, no discriminación, protección de datos personales y, sobre todo, supervisión humana. Eso último no es un detalle menor: significa que ninguna máquina debería tomar decisiones que afecten derechos de personas sin que un ser humano capacitado pueda detenerla, corregirla o invalidarla.

La IA no tiene criterio moral. Las personas sí.

Esto es precisamente lo que señalan expertos en innovación legal como los de IE Law School: el abogado —y en general cualquier profesional— del siglo XXI no puede limitarse a usar herramientas. Tiene que entenderlas, cuestionarlas y saber cuándo no usarlas. La IA automatiza tareas repetitivas, analiza datos y genera contenido a una velocidad imposible para un humano. Pero no distingue entre lo justo y lo injusto. Eso sigue siendo territorio nuestro.

La norma peruana lo recoge al clasificar los riesgos. Hay usos que están prohibidos: manipular decisiones de personas, vigilancia masiva sin base legal, identificación biométrica indiscriminada en espacios públicos. Y hay usos de riesgo alto —como sistemas que determinan el acceso a salud, crédito o justicia— que requieren condiciones estrictas antes de implementarse.

Regulación no es enemiga de la innovación

Uno de los mitos más repetidos es que poner reglas a la IA la frena. Falso. Lo que frena el desarrollo es la desconfianza. Y la desconfianza se genera cuando la tecnología actúa sin que nadie rinda cuentas. La norma crea precisamente ese ecosistema de confianza: obliga a las entidades públicas a tener políticas institucionales de uso ético, a realizar auditorías periódicas y a publicar sus códigos fuente cuando el desarrollo fue con fondos públicos.

Para el sector privado, la implementación es gradual —entre uno y cuatro años según el sector— pero la dirección es clara: transparencia, documentación y rendición de cuentas.

El desafío de fondo: las personas

La tecnología más sofisticada del mundo no sirve de nada si quienes la usan no están preparados. Por eso la norma también empuja la alfabetización digital, la formación en ética y la creación de laboratorios de IA en universidades e institutos. No es casualidad: el verdadero riesgo de la IA no es que piense demasiado, sino que los humanos pensemos de menos.

Usar la IA con ética no es una opción ideológica. En Perú, desde setiembre de 2025, es una obligación legal. »

AI with awareness: using technology without losing control

Artificial intelligence is no longer a promise for the future. It is a reality that exists in hospitals, courts, companies and universities. In Peru, since September 2025, it has regulations: Supreme Decree No. 115-2025-PCM regulates its use under Law No. 31814 and makes clear one thing that many choose to ignore: AI can hurt if not used properly.

This regulation does not come to stop innovation. It is here so no one plays with fire without a fire extinguisher nearby. It stipulates that any AI system must operate subject to specific principles: transparency, non-discrimination, shielding of personal data and, above all, human supervision. The latter is no small detail: it means that no machine should make decisions affecting the rights of individuals without a trained human being that can stop, correct or invalidate it.

AI has no moral criteria, but people do.

This is precisely what legal innovation experts like those at IE Law School point out: the lawyer — and, in general, any professional — of the 21st century cannot restrict themselves to the mere use of tools. They have to understand them, question them and know when not to use them. AI automates repetitive tasks, analyzes data, and generates content at a speed that is impossible for a human. But it does not distinguish between fair and unfair. That's still our domain.

Peruvian law includes this in the classification of risks. There are uses that are prohibited: manipulating people's decisions, mass surveillance without legal basis, indiscriminate biometric identification in public spaces. And there are high-risk uses—such as systems that determine access to health, credit, or justice—that require strict conditions before they are implemented.

Regulation is not an enemy of innovation

One of the most repeated myths is that setting AI rules slows it down. That is fake. What holds back development is mistrust. And mistrust appears when technology acts without anyone being held accountable. The law creates, precisely, an ecosystem of trust: it requires public entities to have ethical institutional policies, conduct periodic audits and publish their source codes when the development was publicly funded.

For the private sector, implementation is gradual — between one and four years depending on the sector — but the direction is clear: transparency, documentation and accountability.

The core challenge: individuals

The most sophisticated technology in the world is useless if those using it are not prepared. That is why the law also pushes digital literacy, a background on ethics and the creation of AI laboratories in universities and institutions. This is no accident: the real risk of AI is not that it thinks too much, but that humans think too little.

Using AI ethically is not an ideological choice. In Peru, since September 2025, it is a legal obligation.)))



La prueba de oficio tras el X Pleno Casatorio Civil

Por medio de este comentario, analizamos la influencia del X Pleno Casatorio Civil en la aplicación de la prueba de oficio dentro del proceso civil peruano, centrándonos en la tensión existente entre la búsqueda de la verdad material y el respeto de las garantías procesales, especialmente el principio de preclusión y la imparcialidad judicial. Aunque el X Pleno Casatorio Civil tuvo como finalidad establecer criterios claros para el uso de esta facultad judicial, el análisis efectuado demuestra que su aplicación práctica ha seguido siendo objeto de debate en la jurisprudencia emitida con posterioridad a su publicación.

Desde el punto de vista teórico y normativo, la prueba de oficio es concebida como una potestad jurisdiccional excepcional que permite al juez incorporar medios probatorios adicionales cuando la actividad probatoria de las partes resulta insuficiente para formar convicción

sobre los hechos controvertidos. Esta institución encuentra su fundamento en el artículo 194° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30293, norma que delimita expresamente los presupuestos para su ejercicio: insuficiencia probatoria real, existencia de una fuente de prueba previamente citada por las partes, pertinencia del medio probatorio, respeto del derecho de contradicción y motivación reforzada de la decisión judicial. En este marco, la prueba de oficio no constituye un derecho de las partes ni un mecanismo para suplir su carga probatoria, sino una herramienta orientada a garantizar decisiones jurisdiccionales fundadas y racionalmente controlables.

El X Pleno Casatorio Civil refuerza esta concepción al precisar que la prueba de oficio es una facultad excepcional y no un deber automático del juez. Así mismo, establece límites estrictos para su aplicación, entre ellos su actuación en una sola oportunidad y la

prohibición de emplearla para corregir la negligencia procesal de las partes. De este modo, el precedente busca preservar el equilibrio entre el rol activo del juez y la estructura contradictoria del proceso, evitando afectaciones al principio de igualdad procesal y a la imparcialidad judicial.

Un eje central de análisis es la relación entre la prueba de oficio y el principio de preclusión. La preclusión divide el proceso en etapas sucesivas y excluyentes, imponiendo a las partes la carga de realizar sus actos procesales dentro de plazos determinados. Su finalidad es garantizar la seguridad jurídica, la previsibilidad del proceso y el derecho de defensa. La doctrina advierte que un uso indiscriminado de la prueba de oficio puede desnaturalizar este principio, al permitir la reapertura de etapas procesales ya cerradas. Sin embargo, el X Pleno introduce una flexibilización limitada al admitir que, en supuestos excepcionales y debidamente motivados, el juez pueda valorar la incorporación oficiosa de medios probatorios ofrecidos extemporáneamente o declarados improcedentes, siempre que ello sea indispensable para el esclarecimiento de los hechos.

Luego de revisar diversa jurisprudencia emitida entre los años 2020 y 2026, hemos podido identificar una evolución progresiva en la recepción del X Pleno Casatorio Civil. Durante el año 2020, su influencia fue incipiente debido a su corto periodo de vigencia, observándose decisiones que aún no incorporaban plenamente sus reglas. En 2021 y 2022, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional comenzaron a aplicar con mayor claridad los criterios del Pleno, validando la prueba de oficio solo cuando existía una insuficiencia probatoria real y rechazando su uso como instrumento para subsanar la inactividad de las partes.

En el año 2023 se aprecia una etapa de madurez jurisprudencial, en la cual la prueba de oficio es analizada desde una perspectiva más técnica y garantista. Las decisiones enfatizan el deber de motivación reforzada, el respeto del contradictorio y la necesidad de impugnación oportuna frente a excesos en su actuación. Para el año 2024, la tendencia se consolida exigiendo una justificación sustantiva estricta sobre la relevancia y necesidad del medio probatorio incorporado de oficio, incluso en contextos de rebeldía procesal.

La jurisprudencia del año 2025 muestra un giro relevante, al reconocer que, en ciertos supuestos, la actuación de pruebas de oficio puede devenir en un instrumento indispensable para garantizar el debido proceso y alcanzar una decisión materialmente justa. No obstante, incluso en estos casos, se reafirma que

dicha potestad no elimina la vigencia del principio de preclusión ni exonera a las partes de su deber de diligencia procesal. Finalmente, el análisis del año 2026, aunque limitado por ser el año en curso, confirma una continuidad en la lógica de excepcionalidad. La línea jurisprudencial de estos siete años revela que, a pesar de los temores iniciales sobre posibles excesos judiciales, la mayoría de los magistrados ha optado por un respeto estricto a los límites del X Pleno Casatorio Civil.

En conclusión, la prueba de oficio en el Perú ha dejado de ser una potestad deliberada para convertirse en una institución reglada. Si bien el principio de preclusión puede ceder ante la necesidad de una resolución justa, esto solo ocurre bajo un estándar de justificación exigente. La jurisprudencia ha logrado equilibrar la balanza: el juez no reemplaza a las partes en su deber de probar, pero tampoco es un espectador pasivo frente a la injusticia por falta de información. El éxito del X Pleno Casatorio Civil reside, entonces, en haber transformado una facultad controversial en un mecanismo de auxilio judicial con límites precisos y controlables. ¶



JULISSA YAMANI FERNÁNDEZ

Socia, experta en litigios

Partner, Litigation Specialist

jyamani@munizlaw.com

The role of ex officio evidence following the tenth civil cassation plenary decision

In this article, we examine the impact of the Tenth Civil Cassation Plenary Decision on the use of ex officio evidence in Peruvian civil proceedings, focusing on the tension between the pursuit of substantive truth and the protection of procedural safeguards—particularly the principles of preclusion and judicial impartiality. Although the Tenth Civil Cassation Plenary Decision sought to establish clear criteria for exercising this judicial authority, our analysis shows that its practical application remains contested in case law issued after its publication.

From a theoretical and statutory perspective, ex officio evidence is regarded as an exceptional judicial power that enables a judge to admit additional evidence when the parties' submissions are insufficient to determine the disputed facts. This institution is grounded in Article 194 of the Peruvian Code of Civil Procedure, as amended by Law No. 30293, which expressly sets the requirements for its exercise: actual evidentiary insufficiency, the existence of a source of evidence previously identified by the parties, relevance of the evidentiary means, respect for the right to challenge and respond to the evidence, and enhanced reasoning in the judicial decision. In this context, ex officio evidence does not constitute a right of the parties or a mechanism to relieve them of their burden of proof, but rather a tool designed to ensure that judicial decisions are well-grounded and subject to rational review.

The Tenth Civil Cassation Plenary Decision reinforces this understanding by clarifying that ex officio evidence is an exceptional judicial power rather than an automatic duty of the judge. It also imposes strict limits on its application, including that it may be invoked only once and may not be used to remedy procedural negligence by the parties. In this way, the precedent seeks to preserve the balance between the judge's active role and the adversarial nature of the proceedings, thereby ensuring that the principles of procedural equality and judicial impartiality are not compromised.

One central issue examined in this study is the relationship between ex officio evidence and the principle of preclusion. Preclusion divides the proceedings into successive, mutually exclusive stages, requiring the parties to take procedural steps within specified time limits; its purpose is to ensure legal certainty, procedural predictability, and the parties' ability to fully exercise their right of defense. Legal doctrine cautions that the indiscriminate use of ex officio evidence may undermine this principle by permitting the reopening of procedural stages that have already been concluded. However, the Tenth Civil Cassation Plenary Decision introduces a limited degree of flexibility by recognizing that, in exceptional cases supported by adequate reasoning, the judge may admit the ex officio evidence offered beyond the statutory timeframe or previously declared inadmissible, provided that such evidence is indispensable to clarify the facts.

After reviewing several judicial decisions issued between 2020 and 2026, we identified a gradual evolution in the way the Tenth Civil Cassation Plenary Decision has been received and applied. In 2020, its influence was still incipient given its relatively short period in force, and judicial decisions had not yet fully incorporated its guidelines. In 2021 and 2022, both the Supreme Court and the Constitutional Court began to apply the criteria established by the Tenth Civil Cassation Plenary Decision more consistently, upholding ex officio evidence only where there was actual evidentiary insufficiency and rejecting its use as a remedy for the parties' procedural inactivity.

By 2023, case law had reached a stage of maturity, in which ex officio evidence was analyzed from a more technical perspective and with greater regard for procedural safeguards. The decisions emphasize the requirement of enhanced judicial reasoning, respect for the adversarial process, and the need to challenge in a timely manner any excesses in the exercise of this power. By 2024, this trend had become firmly established, requiring a rigorous substantive justification for the relevance and necessity of evidence admitted ex officio, even where a party had been declared in default.

Case law from 2025 marks a significant shift, recognizing that, in certain circumstances, the ex officio admission of evidence may become an indispensable tool for ensuring due process and achieving a substantively fair judgment. However, even in such cases, it is reiterated that this judicial power does not override the principle of preclusion, nor does it absolve the parties of their duty of procedural diligence. Finally, the analysis of 2026—necessarily limited because it is the current year—confirms the continued adherence to the principle that ex officio evidence constitutes an exceptional judicial power. The case law developed over these seven years shows that, despite initial concerns about potential judicial overreach, most judges have chosen to adhere strictly to the limits established by the Tenth Civil Cassation Plenary Decision.

In conclusion, ex officio evidence in Peru has ceased to be a broadly discretionary judicial power and has become a regulated institution governed by clearly defined legal standards. While the principle of preclusion may yield to the need to reach a substantively fair decision, this may occur only where a stringent standard of justification is satisfied. The case law has struck a balance: the judge does not substitute for the parties in discharging their burden of proof, yet neither remains a passive observer in the face of injustice caused by evidentiary insufficiency. The success of the Tenth Civil Cassation Plenary Decision lies, therefore, in having transformed a controversial judicial power into a mechanism of judicial assistance subject to precise and reviewable limits.)))



¿Es posible que la responsabilidad penal alcance a gerentes y directores de la empresa?

Esta pregunta es uno de los tópicos que más frecuentemente se nos consulta en nuestra labor como asesores en asuntos penales. De suceder un delito dentro de las operaciones de la empresa, ¿el gerente general o inclusive el directorio está expuesto a ser imputado penalmente?

La pregunta evidencia una preocupación válida de quien, además de administrar la empresa y buscar que alcance sus objetivos comerciales y financieros, también debe soportar la posibilidad de ser procesado y sancionado penalmente, independientemente de su efectiva participación en los hechos investigados. En efecto, en nuestro país las autoridades a cargo del proceso penal, llámese los fiscales y jueces, tienen la tendencia de atribuir responsabilidad penal por el cargo, presumiendo a priori que el gerente o

director, por ostentar dicho cargo, tiene el control y responsabilidad total de lo que pasa en la empresa. Esto incluso es más grave en caso se investigue un delito ambiental, pues la existencia del artículo 314-A del Código Penal y su aplicación literal es utilizada para atribuir responsabilidad al representante legal, más allá de que exista o no una intervención concreta y corroborada en su contra.

Claramente en caso el gerente o director haya ordenado, ejecutado o, en general, se haya servido de la empresa para delinquir, estaremos en un escenario de atribución adecuada de responsabilidad penal basada en su intervención directa y un “dominio de hecho o del devenir del curso delictivo”. La problemática surge cuando a pesar de no haber tenido dicha intervención ni dominio de los hechos, la Fiscalía

pretende responsabilizar al gerente o director porque se asume que debía conocer o controlar todo lo que sucede en la empresa, sin investigar su efectiva intervención. Razonamiento que, por contravenir el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal que proscribire toda forma de responsabilidad por hechos ajenos, no debería prosperar.

Ante este escenario, desde hace varios años, la Corte Suprema viene emitiendo jurisprudencia casatoria corrigiendo esta práctica, exigiendo a la Fiscalía que, en caso se busque atribuir responsabilidad penal a un integrante de la Alta Dirección de la empresa, indispensablemente deba: I. Identificar el ámbito o competencia funcional del investigado dentro de la empresa, II. Acreditar que el investigado omitió su deber funcional (posición de garante) y III. Que dicha omisión funcional propició el resultado delictivo. Destacan, en ese sentido, las Casaciones 455-2017 Pasco o la Casación 1563-2019 La Libertad, que entienden la imputación contra un órgano de administración y/o dirección posible en clave de omisión impropia por tener posición de garante frente a los riesgos penales derivables de la actividad de la empresa.

Por lo anterior, con base en estos lineamientos planteados por la Corte Suprema, es indispensable una **delimitación de funciones y responsabilidades (competencias)** en los procesos críticos de la empresa (riesgos laborales, riesgos ambientales, corrupción, lavado de activos, etc), para evitar que la Fiscalía escale o atribuya inadecuadamente la posible responsabilidad penal dentro de la empresa.

Lo anterior, una clara e inequívoca delimitación funcional, se puede lograr aprovechando los instrumentos internos y propios de la empresa, como son: mapa de procesos, descripción de puestos, procedimientos operativos, contratos de trabajo, etc.

¿EL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN AMBIENTAL CONLLEVA LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE?

- La gran mayoría de investigaciones penales por atentados contra el medio ambiente se originan por una fiscalización ambiental, en la que el organismo supervisor solo identifica la superación de un parámetro contemplado en la norma o en el instrumento de gestión ambiental o, en general, en el incumplimiento de una obligación ambiental.

- La pregunta que surge es: ¿ello es suficiente para sostener que se ha cometido delito ambiental?
- La Corte Suprema, mediante Acuerdo Plenario 02.B-2023 Fundamento Jurídico 34, ha aclarado que no basta con la mera infracción administrativa de una obligación ambiental, sino que es necesario que la conducta investigada conlleve un peligro potencial contra el medio ambiente o haya causado un daño tangible contra dicho bien jurídico.
- Este criterio diferenciador vinculante para los órganos jurisdiccionales sirve para esclarecer y delimitar el alcance de la persecución penal, que no debe ser utilizada para procesar y sancionar infracciones administrativas.)))



IAN GALARZA MORALES

Socio senior, experto en compliance/derecho penal
Senior Partner, Expert in Compliance and Criminal Law
igalarza@munizlaw.com

Is it possible for criminal liability to extend to the company's managers and/or directors?

This question is one of the most frequently asked topics in our work as criminal defense advisors. If a crime occurs within the company's operations, is the general manager or even the board of directors at risk of facing criminal charges?

The question highlights a valid concern from someone who, in addition to managing the company and striving to ensure it meets its business and financial goals, must also face the possibility of being criminally prosecuted and punished, regardless of their actual involvement in the events under investigation. In fact, in our country, the authorities in charge of criminal proceedings —namely state attorneys and judges— tend to attribute criminal liability based on a person's position, presuming a priori that the manager or director, by virtue of holding that position, has total control over and responsibility for everything that happens within the company. This is even more serious in the case of an investigation into an environmental crime, as the existence of section 314-A of the Criminal Code and its literal application are used to attribute liability to the legal agent, regardless of whether there is concrete and confirmed evidence of their involvement.

Clearly, if a manager or director has ordered, carried out, or, in general, used the company to commit a crime, we are dealing with a situation where criminal liability can be appropriately attributed based on their direct involvement and their "control over the fact or over the criminal course of the events." The problem arises when, despite the fact that the manager or director had no involvement in the matter and was not aware of the facts, the Attorney General's Office seeks to hold them liable under the assumption that they should have known about or controlled everything that happens within the company, without investigating their real participation. This line of reasoning violates Article VII of the Preliminary Title of the Criminal Code, which prohibits any form of liability for the acts of others, and should not be allowed.

In this scenario, and for several years now, the Supreme Court has been continuously issuing cassation jurisprudence to correct this practice, requiring the Attorney General's Office that, if it seeks to hold a member of the company's senior management criminally liable, it must, without exception: I. Identify the scope or functional competence of the person under investigation within the company, II. Establish that the person under investigation failed to fulfill their functional duty (in their capacity as guarantor) and III. That said failure in their duties led to the criminal outcome.

Notable examples in this regard include Cassation Case No. 455-2017 (Pasco) or Cassation Case No. 1563-2019 (La Libertad), which recognize the possibility of an accusation against a management and/or governing body under the theory of improper omission, by virtue of its position as guarantors with respect to the criminal risks arising from the company's activities.

Therefore, based on these guidelines set out by the Supreme Court, it is essential to clearly define roles and responsibilities (areas of competence) in the company's critical processes (occupational risks, environmental risks, corruption, money laundering, etc.) to prevent the Attorney General's Office from improperly escalating or attributing potential criminal liability within the company.

This clear and unambiguous delimitation of duties can be achieved by taking advantage of the company's own internal tools, such as process map, job descriptions, operating procedures, employment agreements, etc.

DOES THE VIOLATION OF AN ENVIRONMENTAL OBLIGATION LEAD TO AN ENVIRONMENTAL CRIME?

- Most criminal investigations about environmental crimes originate from an environmental audit, in which the regulatory agency only identifies a violation of a parameter specified in the law or regulation of the environmental management instrument, or, in general, a breach of an environmental obligation.
- A question arises: Is that enough to conclude that an environmental crime has been committed?
- The Supreme Court, in Plenary Accord 02.B-2023, Legal Basis 34, has clarified that a mere administrative violation of an environmental obligation is not sufficient; rather, the conduct under investigation must pose a potential danger to the environment or have caused tangible harm to that legal interest.
- This binding criterion for judicial bodies serves to clarify and define the scope of criminal prosecution, which must not be used to prosecute and punish administrative violations. ¶



En el segundo trimestre del 2026 destacaron dos proyectos de ley. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Proyecto que garantiza la acreditación inmediata de las transferencias interbancarias¹

La congresista María del Carmen Alva presentó el Proyecto de Ley n.º 14500 que tiene por objetivo garantizar que toda transferencia interbancaria realizada en el sistema financiero sea acreditada de manera inmediata en la cuenta de destino desde el momento en que los fondos sean debitados de la cuenta del usuario ordenante.

Las empresas del sistema financiero estarán obligadas a asegurar que todo débito efectuado por concepto de transferencia interbancaria conlleve la acreditación inmediata y simultánea del monto transferido en la cuenta de destino.

Así, los fondos deberán permanecer disponibles en la cuenta del usuario ordenante hasta que se ejecute la transferencia de manera inmediata. Cualquier afectación previa a la disponibilidad será considerada una práctica indebida.)))

Proyecto que crea el programa «Mi primera chamba» y establece un subsidio para promover la contratación formal²

El Proyecto de Ley n.º 14541, presentado por el congresista José Luna Gálvez de la bancada Podemos Perú, busca crear el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales para Jóvenes, «Mi primera chamba», en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que otorga un subsidio para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado.

El subsidio constituye un monto dinerario que se otorga temporalmente para financiar el 30 % de la remuneración bruta mensual de los jóvenes de 18 a 29 años con nuevos empleos formales (altas), a empleadores con hasta cien trabajadores del sector privado, por un plazo máximo de 6 meses.)))

* El Estudio Muñiz presenta bimensualmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso, una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que serán discutidos en el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

¹ Proyecto de ley 14500/2025-CR. <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Mzg5ODc4/pdf>

² Proyecto de ley 14541/2025-CR. <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzkxMDE2/pdf>



Two bills stood out in the second quarter of 2026. Below, we present a summary of both proposals.

A project that ensures the immediate clearing of interbank transfers¹

Congresswoman María del Carmen Alva introduced Bill No. 14500, which aims to ensure that all interbank transfers made within the financial system are credited immediately to the recipient's account as soon as the funds are debited from the sender's account.

Financial institutions will be required to ensure that any debit resulting from an interbank transfer results in the immediate and simultaneous crediting of the transferred amount to the recipient's account.

Therefore, the funds must remain available in the sender's account until the transfer is processed immediately. Any interference with availability will be considered a violation of professional conduct.)))

Bill Creating the “Mi Primera Chamba” (My First Job) Program and Establishing a Subsidy to Promote Formal Hiring²

Bill No. 14541, introduced by Congressman José Luna Gálvez of the Podemos Perú caucus, seeks to establish the National Program for the Promotion of Employment Opportunities for Youth, “Mi primera chamba”, within the Ministry of Labor and Employment Promotion, which provides a subsidy to promote the formal hiring of young people aged 18 to 29 in the private sector.

The subsidy is a temporary cash payment designed to cover 30% of the gross monthly wages of young people aged 18 to 29 who have recently started new formal jobs, provided to employers with up to 100 employees in the private sector, for a maximum period of 6 months.)))

* Muñiz Law Firm provides all its clients with the legal publication “From the Congress” every two months. This publication includes a selection of bills currently under discussion in the Congress of Peru that may impact the business environment. In this column, we will highlight two of several bills still undergoing review by Congressional Committees.

¹ Bill No. 14500/2025. <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Mzg5ODc4/pdf>

² Bill No. 14541/2025. <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzkxMDE2/pdf>



ARTURO FERRARI CARRASCO
Gerente de Comunicaciones del Estudio Muñiz
Communications Manager at Estudio Muñiz
aferrari@munizlaw.com

Vamos a la playa, oh, o-o-o-oh

Vamos a la playa, oh, o-o-o-oh. Vamos a la playa. La bomba estalló. Fue el tormentone del verano de 1983 en Italia. El tema del dúo Righeira, portaestandarte de la música disco en la península, había conquistado las radios (un *tormentone* es un texto corto, fácil de recordar, que se repite constantemente y que genera una aceptación emocional que puede durar semanas).

El verano ha servido para crear conceptos que han marcado la vida política italiana. Un *governo balneare* (gobierno de verano) es uno de poca duración, dirigido la mayoría de las veces por un «técnico» y no por un político. Por coincidencia, su mandato arrancaba en junio (inicio del verano) y guiaba a la nación hasta noviembre o diciembre, fecha en la que se realizaban elecciones. Es decir: no nos compliquemos en verano, dejemos todo para el frío invierno.

Un ejemplo de *governo balneare* es el de Giovanni Leone (entre julio y diciembre de 1963). No fue el único. Entre junio de 1968 y diciembre de ese año repitió el plato. Y han seguido otros más. Leone, alto dirigente de la democracia cristiana, fue elegido años después presidente de la República (1971-1978).

Italia es una república parlamentaria. Los roles del jefe de Estado y jefe de Gobierno están definidos en la Constitución. Terminada la Segunda Guerra Mundial, mediante un referéndum, se eligió a la república en lugar de continuar con la monarquía (1946). La familia real Savoia abandonó el país y comenzó la Primera República (la Segunda comenzó a inicios de los 90, luego de *tangentopoli* —un escándalo de sobornos e intercambio de favores que aniquiló a los partidos que habían gobernado durante casi 50 años—, la caída del muro de Berlín a finales de los 80 y la aparición en política del multimillonario Silvio Berlusconi, propietario del AC Milan).

¿Hemos tenido «gobiernos de verano» en Perú? Pareciera que sí. José Jerí asumió el cargo de presidente en octubre del año pasado (el invierno nos dejaba y el clima empezaba a cambiar) y fue censurado en febrero (pleno verano): 4 meses. Acto seguido, José María Balcázar tomó la posta (gobernará 5 meses). Retrocedamos un poco. Francisco Sagasti llegó en noviembre de 2020 y partió en julio del año siguiente (8 meses). Manuel Merino fue un veranillo de otoño en noviembre (5 días).

En Perú no han existido gobiernos de tipo parlamentario. En realidad, seguimos un modelo presidencial al que se le han agregado elementos de control tomados del parlamentarismo (presidencialismo atenuado). Adoptar uno —algunos han susurrado que sería lo más apropiado— iría en contra de nuestra historia constitucional. El *tormentone* de Righeira llegó por aquí en el verano de 1984. La Herradura y Redondos tenían arena. No vayamos a terminar como dice su estribillo más conocido. *Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa. La bomba estalló.*)))

Let's go to the beach, oh, o-o-o-oh

Let's go to the beach, oh, o-o-o-oh. Let's go to the beach. The bomb exploded. It was the tormentone of 1983 in Italy. The song by the duo Righeira, the standard-bearer of disco music across the Iberian peninsula, had taken over the airwaves (a "tormentone" is a short text, easy to remember, that is constantly repeated and generates an emotional response that can last for weeks).

This summer has helped forge concepts that have shaped Italian political life. A "governo balneare" (short-lived government) is a short-lived administration, usually led by a "technocrat" rather than a politician. Coincidentally, the current administration began in June (the beginning of summer) and lasted until November or December, when elections were held. In other words: let's not overcomplicate things in the summer; let's save it all for the cold winter.

One example of a "governo balneare" is that of Giovanni Leone (between July and December 1963). It wasn't the only one. Between June and December 1968 he served a second term in the same conditions. And several others have followed since. Leone, a senior leader of the Christian Democratic Party, was elected President of the Republic several years later (1971–1978).

Italy is a parliamentary republic. The roles of the head of state and the head of government are defined in the Constitution. After World War II ended, a referendum was made in 1946 and a republic was chosen over the continuation of the monarchy. The Savoy royal family had fled the country, and the First Republic began. The Second Republic began in the early 1990s, following Tangentopoli—a bribery and kickback scandal that wiped out the parties that had governed for nearly 50 years—the fall of the Berlin Wall in the late 1980s, and the political debut of billionaire Silvio Berlusconi, owner of AC Milan.

Have we ever had short-lived government in Peru? It seems so. José Jerí took office as president last October (as winter was coming to an end and the weather was starting to change) and was censured in February (in the height of summer): He lasted 4 months in office. José María Balcázar then took office (he served for five months). Let's step back a bit. Francisco Sagasti took office in November 2020 and left in July of the following year (only served for eight months). Manuel Merino was a brief autumn summer in November—lasting only five days.

Peru has never had a parliamentary government. In fact, we have a presidential system to which check-and-balance elements borrowed from parliamentarism have been added (attenuated presidentialism). Adopting that system, as some have suggested would be the most appropriate thing to do, goes against our constitutional history. Righeira's tormentone arrived here in the summer of 1984. La Herradura and Redondos were still sandy beaches. Let's hope we don't end up like their most famous chorus says. Let's go to the beach, oh, oh. Let's go to the beach. The bomb exploded.)))

CORTE SUPREMA DECLARÓ ILEGAL Y NULA NORMA QUE IMPEDÍA TERCERIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRINCIPALES O NUCLEARES

El 23 de febrero de 2022 se publicó en El Peruano el Decreto Supremo n.º 001-2022-TR, que modificó diversos artículos del reglamento de la Ley de Tercerización Laboral, estableciendo que el concepto de «actividades principales» debe ser diferenciado entre actividades principales nucleares y las que no lo son, precisando que la tercerización solo puede ejecutarse respecto de estas últimas, pese a que la Ley n.º 29245 y el Decreto Legislativo n.º 1038, que son las normas reglamentadas, no prevén esa diferencia ni dicha limitación.

Uno de los graves problemas era que el nuevo concepto de «actividades principales nucleares» no era claro, pues, si bien se enlistaban algunos supuestos, la norma terminaba diciendo «entre otros», lo que permitía la posibilidad para que quienes cuestionen un proceso de tercerización, arbitrariamente puedan introducir algunos elementos no contemplados expresamente en la norma a fin de lograr una desnaturalización.

Justamente, en esa línea se estableció también que la realización de actividades nucleares era causal de desnaturalización de la tercerización y, además, se indicó que, en el plazo máximo de 180 días, se debían «adecuar» los contratos de tercerización, de modo que aquellos trabajadores que prestaban servicios en virtud de un contrato de tercerización, coadyuvando a la realización de actividades principales nucleares, debían pasar a la planilla de la empresa principal.

Identificadas estas patentes ilegalidades, a solicitud de uno de nuestros clientes, nuestro Estudio interpuso la primera demanda de acción popular el 25 de marzo de 2022 y semanas después lo hicieron otras instituciones y gremios de empleadores.

Dado que una acción popular es un proceso constitucional, nuestros principales argumentos fueron que el Decreto Supremo n.º 001-2022-TR colisionaba contra el principio de jerarquía normativa (artículo 51 de la Constitución), vulneraba el derecho fundamental a la libertad de contratación (artículo 62 de la Constitución), y transgredía los límites de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo (numeral 8 del artículo 118 de la Constitución y artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo).

Debido a la existencia de varias demandas todos los procesos fueron acumulados en un solo expediente. El 8 de marzo de 2023 la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda, acogiendo parcialmente nuestros fundamentos.

Dicha sentencia fue apelada por todas las partes intervinientes en el proceso, por lo que el expediente fue elevado a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, cuya audiencia para los informes orales se realizó el 3 de noviembre de 2025.

En dicha oportunidad nuevamente nuestros abogados sustentaron la inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto Supremo n.º 001-2022-TR mencionando que, a ese momento, el Indecopi ya había resuelto una denuncia sobre barreras burocráticas que había adquirido la condición de cosa decidida al no haber sido impugnada por el Ministerio de Trabajo, por lo

que, en cumplimiento del Decreto Supremo n.º 059-2025-PCM, debía derogarse la norma cuestionada, tal como ocurrió con el Decreto Supremo n.º 009-65 sobre la obligación de contratar asistentes sociales en las áreas de recursos humanos.

El 6 de abril de 2026 recién fuimos notificados a nuestra casilla electrónica con la sentencia de la Corte Suprema, la que, revocando la sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda en todos sus extremos.

Esta sentencia es sumamente relevante e histórica, pues establece lo siguiente:

- Que el decreto supremo en mención es inconstitucional e ilegal al contravenir los límites de la potestad reglamentaria y el principio de jerarquía normativa, tal como lo señalamos en nuestra demanda, ello porque no es viable que mediante una norma reglamentaria se pretenda modificar una norma con rango de ley.
- Que sí es posible tercerizar las actividades principales nucleares, pues la Ley n.º 29245 no impide aquello, por lo que el decreto supremo en referencia no puede establecer esta limitación.
- Que las demás limitaciones, obligaciones y sanciones previstas por dicho decreto supremo quedan sin efecto.

En consecuencia, se declaró nulo tal decreto supremo, siendo relevante mencionar que dicha sentencia es definitiva. No puede cuestionarse ante el Tribunal Constitucional que, como es de público conocimiento, ha emitido dos sentencias en las que declaró constitucional dicho decreto supremo.

Es importante acotar que mediante el Decreto Supremo n.º 015-2022-TR se modificó el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, estableciendo una serie de sanciones sustentadas precisamente en el Decreto Supremo n.º 001-2022-TR. Además, mediante Resolución de Superintendencia n.º 428-2022-SUNAFIL se aprobó el Protocolo n.º 001-2022-SUNAFIL/DINI, denominado «Protocolo para la Fiscalización de la Tercerización Laboral», también solventado en la norma declarada nula.

Siendo así, ambas normas deberían seguir el mismo camino que el Decreto Supremo n.º 001-2022-TR y deberán ser derogadas, mejor si lo hace de oficio el Ministerio de Trabajo.

Finalmente resaltamos que este resultado es consecuencia del trabajo especializado del Área de Derecho Laboral del Estudio Muñiz, y principalmente de los socios Ricardo Javier Herrera Vásquez, César Alfredo Puntriano Rosas y Oxal Víctor Ávalos Jara, quienes diseñaron la estrategia, participaron en todo el proceso y sustentaron con éxito la posición que a la postre ha sido acogida por la máxima instancia judicial.

THE SUPREME COURT RULED THAT THE REGULATION PROHIBITING THE OUTSOURCING OF CORE BUSINESS ACTIVITIES WAS ILLEGAL AND VOID

On February 23, 2022, Supreme Decree No. 001-2022-TR was published in *El Peruano*, amending several provisions of the Regulations of the Labor Outsourcing Law. It set out that a distinction must be made between core business activities and non-core activities, specifying that outsourcing may only be carried out with respect to the latter, even though Law No. 29245 and Legislative Decree No. 1038, which are the legal regulations, do not provide for such a distinction or limitation.

One of the major concerns was that the new concept of “core business activities” lacked clarity. Although the regulation provided certain examples, it concluded with the phrase “among others,” thereby allowing parties challenging an outsourcing arrangement to arbitrarily introduce elements not expressly contemplated by the regulation and, thus, undermining its purpose.

Furthermore, the regulation established that the performance of core business activities constituted grounds for invalidating outsourcing arrangements. It also provided that, within a maximum period of 180 days, outsourcing contracts had to be adapted so that workers rendering services under outsourcing arrangements and contributing to the performance of core business activities would be transferred to the payroll of the main company.

Once these clear legal violations had been identified, and at the request of one of our clients, our firm filed the first *acción popular* lawsuit (popular action) on March 25, 2022. In the weeks that followed, other institutions and employers' associations filed similar actions.

Given that the *acción popular* (popular action) is a constitutional proceeding, our main arguments were that Supreme Decree No. 001-2022-TR violated the principle of the regulatory hierarchy (Article 51 of the Constitution), infringed the fundamental right to freedom of contract (Article 62 of the Constitution), and exceeded the limits of the Executive Branch's regulatory authority under Article 118(8) of the Constitution and Article 8 of the Organic Law of the Executive Branch.

Due to the existence of multiple lawsuits, all proceedings were consolidated into a single case file. On March 8, 2023, the Third Constitutional Chamber of the Superior Court of Justice of Lima ruled that the lawsuit was partially well founded, partially upholding our arguments.

All parties to the proceedings appealed that ruling, and the case was therefore referred to the Permanent Chamber of Constitutional and Social Law of the Supreme Court, which held a hearing for oral arguments on November 3, 2025.

On that occasion, our attorneys once again argued that Supreme Decree No. 001-2022-TR was unlawful. They emphasized that, by then, Indecopi had already issued a final ruling on a complaint concerning bureaucratic barriers, which had become *res judicata* because it had not been challenged by the Ministry of Labor. Therefore, pursuant to Supreme Decree No. 059-2025-PCM, the contested regulation should have been repealed, just as Supreme Decree No. 009-65 had previously been repealed with respect to the requirement to employ social workers in human resources departments.

On April 6, 2026, we were notified by email of the Supreme Court's decision, which reversed the lower court's ruling and upheld the claim in its entirety.

This ruling is highly significant and historic, as it establishes the following:

- The aforementioned Supreme Decree is unconstitutional and unlawful because it exceeds the limits of regulatory authority and violates the principle of the hierarchy of norms, as we argued in our claim. This is because a regulatory provision cannot be used to amend a binding rule.*
- The outsourcing of core business activities is legally allowed, as Law No. 29245 does not forbid it. Consequently, a Supreme Decree cannot impose this restriction.*
- All other restrictions, obligations, and penalties established by the aforementioned Supreme Decree are set aside.*

Consequently, the Supreme Decree was declared null and void. It is important to note that this judgment is final. It cannot be challenged before the Constitutional Court, which, as is widely known, has issued two rulings declaring the Supreme Decree to be constitutional.

It is important to note that Supreme Decree No. 015-2022-TR amended the regulations of the General Labor Inspection Act, establishing a series of penalties based specifically on Supreme Decree No. 001-2022-TR. In addition, Superintendency Resolution No. 428-2022-SUNAFIL approved Protocol No. 001-2022-SUNAFIL/DINI, entitled “Protocol for the Oversight of Labor Outsourcing,” which was likewise based on the provisions of the regulation that was subsequently declared null and void.

Thus, both regulations should follow the same path as Supreme Decree No. 001-2022-TR and should be repealed, preferably ex officio by the Ministry of Labor.

Finally, we would like to emphasize that this outcome is the result of the specialized work of the Labor Law Practice Group at Estudio Muñiz, and primarily of partners Ricardo Javier Herrera Vásquez, César Alfredo Puntriano Rosas, and Oxal Víctor Ávalos Jara, who designed the strategy, participated throughout the entire process, and successfully defended the position that was ultimately upheld by the highest court.

Desayuno ejecutivo

Realizamos nuestro segundo desayuno ejecutivo del año, en el que participaron como expositores Ricardo Herrera, socio principal del área de Derecho Laboral y Seguridad Social, quien expuso sobre los efectos de las cartas inductivas de Sunafil; Fredy Bautista, socio senior del área de Electricidad, quien explicó las alternativas para la reducción del precio del suministro eléctrico; y David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad, quien analizó cuáles serán los escenarios económicos postsegunda vuelta electoral.)))

We held our second executive breakfast of the year, featuring presentations by Ricardo Herrera, Principal Partner of the Labor and Social Security Law Practice, who discussed the effects of SUNAFIL's compliance letters; Fredy Bautista, Senior Partner in the Electricity Practice, who explained alternatives for reducing electricity supply costs; and David Tuesta, former Minister of Economy and Finance and Chairman of the Private Competitiveness Council, who analyzed the economic scenarios that may lie ahead after the second round of voting.)))



TTR DEAL OF THE QUARTER PERU 2026

Holcim completa adquisición del 50.01% de Cementos Pacasmayo

Estudio Muñiz asesoró al comprador



Reconocimiento

TTR ha reconocido como Deal of the Quarter (IQ) a la operación en la que actuamos como asesores de Holcim, líder mundial en la industria cementera, en la adquisición del 50.01 % de Cementos Pacasmayo S.A.A.

La operación fue liderada por nuestros socios Mauricio Olaya y Juan Carlos Vélez, con la participación de Carlos Arata, Jorge Otoya y César Puntriano, así como de los asociados Rolando Wilson, Diego García Sayán, Milagros Mejía, Hilda Fernández, Paola del Villar y Mauricio Kahn.)))

TTR has named the transaction in which we acted as advisors to Holcim, a global leader in the cement industry, in its acquisition of a 50.01% stake in Cementos Pacasmayo S.A.A., as its Deal of the Quarter (QI).

The transaction was led by our partners Mauricio Olaya and Juan Carlos Vélez, with contributions from Carlos Arata, Jorge Otoya, and César Puntriano, as well as associates Rolando Wilson, Diego García Sayán, Milagros Mejía, Hilda Fernández, Paola del Villar, and Mauricio Kahn.)))

Practica UPCino

El Estudio Muñiz participó en el evento «Practica UPCino», realizado el 27 y 28 de mayo en el campus Monterrico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde recibimos a estudiantes interesados en conocer nuestras instalaciones e interactuar con nuestros abogados.)))

Muñiz Law Firm participated in the "Práctica UPCino" event, held on May 27 and 28 at the Monterrico campus of the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Peruvian University of Applied Sciences), where we welcomed students interested in touring our facilities and interacting with our attorneys.)))





GC Powerlist Perú

La prestigiosa publicación inglesa Legal 500 presentó el GC Powerlist Perú 2026, reconocimiento que destaca a los gerentes legales más influyentes del mercado peruano. En su séptima edición consecutiva el evento contó con la participación del Estudio Muñiz, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento del sector legal corporativo del país. »

The prestigious British publication Legal 500 unveiled the GC Powerlist Peru 2026, an award that recognizes the most influential general counsel in the Peruvian market. Now in its seventh consecutive year, the event featured the participation of Estudio Muñiz, reaffirming our commitment to strengthening the country's corporate legal sector. »

GC Summit Perú 2026

Se llevó a cabo el GC Summit Perú 2026, evento organizado por la prestigiosa publicación inglesa Legal 500, que reunió a gerentas y gerentes legales de destacadas empresas peruanas y de la región para conversar sobre los principales retos y tendencias del sector legal corporativo.

Estuvimos a cargo del panel «Oportunidades para mejorar la regulación y el cumplimiento de la normativa ambiental en el Perú», en el que participó Renato de Vettori, socio senior y líder del área de Derecho Ambiental de nuestra firma, acompañado por los panelistas Solange Cuadros, Samir Ziane y Hernán Velando, gerentes legales de importantes empresas peruanas. »

The GC Summit Peru 2026, an event organized by the prestigious British publication Legal 500, was held, bringing together general counsel from leading companies in Peru and the region to discuss the main challenges and trends in the corporate legal sector.

We moderated the panel discussion titled "Opportunities to Improve Environmental Regulation and Compliance in Peru," featuring Renato de Vettori, a senior partner and head of our firm's Environmental Law practice, alongside panelists Solange Cuadros, Samir Ziane, and Hernán Velando, legal managers at major Peruvian companies. »



Un café con tu socio

El Comité de Practicantes del Estudio Muñiz llevó a cabo la actividad «Un café con tu socio». Este espacio reunió a los abogados de la firma con practicantes, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y fortalecer la integración profesional dentro de la organización. »

The Trainee Committee at the Muñiz Law Firm organized the event "Coffee with Your Partner." This event brought together the firm's attorneys and interns with the aim of fostering the exchange of experiences and strengthening professional integration within the organization. »

XX Congreso Internacional del CEIA

Edwin Pezo, socio senior del área de Arbitraje Internacional del Estudio Muñiz, representó a nuestra firma en el XX Congreso Internacional del CEIA «Arbitraje internacional y valor económico: de la estrategia financiera a la ejecución efectiva», espacio que congregó a destacados especialistas del sector legal para analizar las nuevas tendencias, desafíos y oportunidades en esta materia. El evento se realizó en Madrid, España. »

Edwin Pezo, a senior partner in the International Arbitration practice at Estudio Muñiz, represented our firm at the 20th CEIA International Congress, "International Arbitration and Economic Value: From Financial Strategy to Effective Enforcement," an event that brought together leading legal experts to analyze new trends, challenges, and opportunities in this field. The event took place in Madrid, Spain. »



L&E Global

Ricardo Herrera y César Puntriano, socios principales del área de Derecho Laboral y Seguridad Social, participaron en la reunión de medio año de L&E Global, alianza internacional de firmas especializadas en derecho laboral, en Varsovia, Polonia. Durante este encuentro, se abordaron las principales tendencias y desafíos en materia laboral a nivel global, así como las actualizaciones de los grupos de práctica y de la agenda anual de la red. »

Ricardo Herrera and César Puntriano, principal partners in the Labor and Social Security Law practice group, attended the midyear meeting of L&E Global, an international alliance of law firms specializing in labor law, in Warsaw, Poland. During this meeting, participants discussed key global labor trends and challenges, as well as updates on the practice groups and the network's annual agenda. »



ESTUDIO
MUÑIZ

MUÑIZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados

Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú
T (51-1) 611-7000



www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑOZ

MUÑOZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chincha - Cusco - Piura - Chiclayo - Chimbote - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca